
Seguridad Pública y Liderazgo Político

Profesionalizar a la Policía

- ★ Ahora al Menos ya Tenemos un Interés Común
- ★ En el Mejor de los Casos es un mal Necesario
- ★ La Dejan Cebarse en una Sociedad Indefensa

LORENZO MEYER

Take it easy! les pidió, pálido y sorprendido, el chofer del heredero del trono británico, a los 200 "furiosos policías" que el día 15, en pleno zócalo, zarandearon el real Rolls Royce, para obligar al regente a dejar la compañía del príncipe Carlos y entrevistarse con ellos y sin haberse anunciado previamente. ¡Qué lejos estaba Scotland Yard! y cuán justo el refrán popular: "de que cuando la perra es brava... hasta a los de casa muerde".

Pero con ánimo optimista, y echando mano de otro refrán, también se puede decir: no hay mal que por bien no venga. A partir de ese 15 de febrero, el regente y el resto de los habitantes de la ciudad de México tenemos, al menos, un interés común: transformar a la policía. Con base en esta coincidencia, se puede iniciar un proceso que nos beneficiaría por igual a

pobres y ricos, a urbanos y rurales: la reforma de los cuerpos policíacos. El objetivo común debe ser reanudar, en mejores condiciones y con mejores objetivos, el proceso de profesionalización de la policía que se cortó con la desaparición del Cuerpo de Rurales de la Federación a principios del siglo.

En la mejor de las circunstancias, la policía, como los cobradores de impuestos, resulta ser un mal necesario. Es un mal porque no existe la policía perfecta. La que más o la que menos, todas las policías albergan en su seno a elementos que abusan de su posición como integrantes del aparato estatal que controla los instrumentos de la violencia. Sin embargo, las policías son necesarias —imprescindibles—, pues dentro de toda sociedad existen también elementos que deben ser controlados por la fuerza para garantizar el cumplimiento de la ley y, sobre todo, la seguridad física y la propiedad de la mayoría.

Desafortunadamente, en México, y desde hace buen tiempo, los cuerpos de policía han desarrollado —y los responsables políticos tolerado—, un tipo de conducta que aumenta la inseguridad colectiva, pues hace de los policías no guardianes de la ley sino infractores sistemáticos de la misma. Así pues, entre nosotros, del binomio "mal-necesario" al que se hizo referencia, lo que prevalece es el mal y sólo por excepción lo necesario. Así pues el de la policía, es hoy uno de los grandes problemas nacionales. El dar forma a un cuerpo policíaco realmente profesional, que sea visto por la sociedad básicamente como un elemento positivo y sólo excepcionalmente como un mal, es, para decirlo con una frase de moda, una asignatura pendiente.

Entre los temas de la campaña presidencial de Carlos Salinas, y como parte integral de su proyecto de "política moderna", se encontraba la seguridad pública. Dijo el entonces candidato: "La sociedad reclama mayor seguridad... Necesitamos reforzar acciones y precisar responsabilidades en los tres niveles de gobierno, para garantizar mejoras claras en seguridad pública" (Carlos Salinas de Gortari. Por la política moderna. Cien temas, 1987. Es ya 1993, el sexenio está en su última fase, y las mejo-

rias prometidas no se ven por ninguna parte.

La inseguridad pública es un hecho que se experimenta directamente o por medio de la información disponible. Ejemplos recientes son el asesinato de 24 personas en Huautla, Guerrero; el de cinco personas en la estación ferroviaria de Julio Ornelas, en Témoris, Chihuahua; el de las seis niñas baleadas por el comandante de la policía de Chilchotla o el de la matanza en la discoteca de Puerto Vallarta. Los empresarios se quejan de falta de seguridad en sus reuniones con altos funcionarios, y hay secuestros de algunos miembros de ese sector social que no se han aclarado y han dejado un botín de cientos de millones de antiguos pesos a sus autores —que, según sospechas, son ex policías— tales son los casos de Juan Bosco Cortina (1991), Joaquín Vargas (1992) o Gabino Noval (1992). En Lázaro Cárdenas, Michoacán, el comercio cerró un día sus puertas y 15 mil personas llevaron a cabo una "marcha del silencio" como protesta por los robos, secuestros y violaciones que tienen lugar en el municipio. En Sinaloa, la violencia ligada al narcotráfico se antoja endémica. De ocho asaltabancos recién capturados en el estado de México, tres eran policías. Las cifras de la CNDH muestra que las violaciones de los derechos humanos aumentaron el año pasado en 100% respecto del anterior, y resulta que la Procuraduría General de la República encabeza la lista de violadores (El Financiero, 3, diciembre, 1992). Según las estadísticas, en la ciudad de México hay 4 mil bandas juveniles y se comete un delito cada tres minutos, pero como debemos suponer que muchos crímenes no se denuncian, la frecuencia de los hechos ilícitos debe ser mayor (EXCELSIOR, 9 de enero, 1992). En fin, para qué seguir, el punto es claro: la sociedad mexicana necesita, y tiene derecho a exigir de sus autoridades, un bien escaso pero muy necesario: la seguridad.

La otra cara de nuestro complejo problema policíaco, fue la mostrada por los 200 disgustados policías que obligaron al regente Manuel Camacho, a discutir durante dos horas, a pleno sol y en el centro mismo de la ciudad —al estilo del ágora griega, aun-

que no con el mismo espíritu—, algunas de las prácticas y situaciones que impiden a la policía estar a la altura de su misión. Es posible que el disgusto de los policías se deba a las nuevas disposiciones del regente que les dificulta seguir con algunas de sus añejas prácticas corruptas —limitar el "trabajo" de las grúas, asignar a los motociclistas a la tarea específica de agilizar el tráfico en las vías rápidas, reducir el número de patrullas destinadas a vialidad y aumentar las de seguridad, etcétera. Sin embargo, ese hecho no debe hacernos desoír sus quejas. Para empezar, está la de su sueldo, indigno de una policía profesional (de 800 a 900 nuevos pesos al mes, aunque algunos policías mostraron cheque quincenal por apenas 320 o 350 nuevos pesos). Luego está la queja por la exigencia de los superiores del "entre" (la cuota que el policía debe entregar a sus jefes y que sale de los bolsillos de los desafortunados ciudadanos), la humillación sistemática de los subordinados —en especial de las mujeres—, la obligación de los miembros de la corporación de pagar por la gasolina y compostura de sus vehículos, por los uniformes, por las pistolas, por las balas, por los permisos, etcétera. Fuera del DF las cosas no están mejor. Un funcionario de un gobierno estatal, me informó hace tiempo que en algunos lugares la policía no recibe sueldo alguno. Y debe ganar su sustento en una lucha diaria, abierta, contra la sociedad a la que se supone debe proteger y servir.

Es innegable que deben aumentarse, y de manera sustantiva, los sueldos de los policías. Pero por sí mismos eso no resuelve el problema; es necesario también reestructurar esos cuerpos de arriba a abajo. Hasta hoy —señala Guillermo I. Guerrero en un artículo reciente— la policía ha estado más al servicio del gobierno que del ciudadano (El Financiero, 22 de febrero). Y esta afirmación, tan evidente que no requiere mayor prueba, ofrece un punto de partida para iniciar la solución del problema. Hasta ahora, la policía ha sido una servidora incondicional de la élite gobernante y a cambio de esa incondicionalidad, se le ha permitido cebarse descaradamente sobre una sociedad casi indefensa. Sin embargo, el

incidente del Zócalo capitalino, demuestra que el deterioro de los cuerpos policíacos ha llegado a un grado tal, que esto ya no es únicamente un problema exclusivo de los sin poder, sino que empieza a serlo también para las propias élites. Por primera vez en mucho tiempo, los responsables políticos, los empresarios y el mexicano común, ven a la policía desde el mismo lado de la barrera. Este hecho puede cambiar la naturaleza misma del problema, pues los ciudadanos pueden tener como aliados a los poderosos.

Es indispensable para la salud de la República, que con la policía ocurra ahora lo mismo que ocurrió con el ejército cuando concluyó la Revolución. Como se sabe, a partir de su triunfo, los líderes del nuevo régimen se embarcaron en un proceso por transformar a sus fuerzas armadas. El ejército pasó de ser una institución indisciplinada, depredadora, temida por la sociedad, a ser una fuerza profesional que hace exactamente lo que la élite política le manda —la culpa de lo sucedido en 1968 o la campaña antiguerrillera en la montaña de Guerrero es menos del ejército y más de la clase política—, y que sólo excepcionalmente se va por la libre, tal y como ocurrió recientemente en Baborigame, Chihuahua.

Ahora bien, para que la élite política invirtiera dinero y esfuerzo en profesionalizar a las fuerzas armadas, fue necesario que antes quedara demostrado que un ejército sin profesionalización era un peligro no exclusivamente para la sociedad sino también para las propias élites. A fuerza de enfrentar rebeliones militares —la del Plan de Agua Prieta, la delahuertista, la de Gómez y Serrano, la escobarista, la cedillista y la amenaza de una almanista—, los presidentes amenazados, actuaron. La circunstancia de la segunda Guerra Mundial, sirvió para cerrar con broche de oro este proceso de control y profesionalización militar. A partir de entonces, el ejército dejó de ser un problema tanto para gobernantes como para el grueso de la sociedad. Es necesario, que ahora el fenómeno se repita con el otro cuerpo armado del Estado: la policía.

La propuesta no es absurda. En su último artículo (EXCELSIOR, 22 de febrero), Jorge Bustamante asegura que en Tijuana ha

tenido lugar un desarrollo sorprendente en materia policíaca. Hasta hace poco, los mexicanos que emigraban sin documentos a Estados Unidos y pasaban por Tijuana, tenían como principal enemigo a la policía local. Se calcula según Bustamante, que anualmente esa policía despojaba a los indefensos emigrantes de cinco millones de dólares! Pero ocurrió que ante tan escandalosa situación, se decidió crear una fuerza especial denominada Grupo Beta, conformada con agentes seleccionados de la Secretaría de Gobernación, de la Policía Judicial de Baja California y de la policía municipal de Tijuana. De acuerdo con las encuestas hechas al azar por miembros del Colegio de la Frontera Norte a personas que cruzan de Tijuana a Estados Unidos, a partir de la creación del Grupo Beta —es decir, a raíz de la profesionalización de un cuerpo de policía—"la extorsión policial donde opera el Grupo en Tijuana prácticamente ha desaparecido".

Si se pudo en Tijuana, donde fue necesario atacar intereses creados de una magnitud formidable —cinco millones de dólares anuales son un interés creado muy poderoso—, pues también debe poderse en el Distrito Federal, y en cualquier otra parte. No tengo duda de que la sociedad mexicana, don't el partido del Estado p. gastar 60 millones de dólares en tres campañas electorales estatales (Hidalgo, Guerrero y Quintana Roo), estaría mucho más dispuesta a que recursos públicos como esos, se destinaran a sueldos policíacos dignos y a la compra y mantenimiento de vehículos y de todo el equipo que requiere una policía realmente profesional. Me resulta difícil imaginar que alguien objetara becar a un cuerpo seleccionado de cadetes a los largo de los varios años que requiriera una verdadera carrera y en una academia de policía similar a las que existen en los países con cuerpos de policía reputados como auténticamente profesionales.

Es claro que una reestructuración de la policía mexicana no sólo requiere de dinero y asesoría, sino, sobre todo, de voluntad política. Se trata de una tarea de largo plazo. La sociedad mexicana pareciera tener esa voluntad y capacidad, pero ¿y el gobierno?